Problemas para el Reconocimiento del Pluralismo Legal en América Latina

Wolfgang Gabbert

Introducción: Antropología jurídica y autonomía indígena

Desde hace más o menos dos décadas se nota un creciente interés por la antropología jurídica y, en particular, por los problemas de “pluralismo legal”, que puede ser definido como la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico.¹ Entre la población indígena de América Latina, por ejemplo, se sigue empleando formas de regulación de conflictos y de control social que difieren en menor o mayor medida del derecho oficial y por ende son consideradas ilegales por los estados en muchos casos.²

En las comunidades indígenas del altiplano de Chiapas en México, por ejemplo, se ha considerado la participación en el sistema de cargos político-religiosos como obligatorio. Quién se niega a cumplir con ese deber muchas veces está en-

¹ Una primera versión más ampliada esta ponencia ha sido publicado bajo el título: “La interacción entre derecho nacional y derecho consuetudinario en América Latina,” en: Pérez Galán, Beatriz/ Dietz, Gunther (eds.), *Globalización, resistencia y negociación en América Latina*. Madrid: Catarata, pp. 127-142.

Para esta definición véase también Yrigoyen Fajardo 1999: 346; Merry 1988: 869; Griffiths 1986: 2. El pluralismo jurídico puede resultar de una situación colonial, ser fruto de una revolución o consecuencia de la presencia de actores transnacionales en un país [Sousa Santos 1998]. Agradezco mucho los valiosos comentarios que Gonzalo Ramírez de Haro hizo a una versión preliminar de este texto.

² En lo que sigue hablo del “derecho nacional” cuando me refiero a los sistemas legales de los países de América Latina para evitar confusiones posibles con los órdenes jurídicos de los estados en los países con constituciones federales.

carcelado por algún tiempo por las autoridades “tradicionales”³ hasta que se muestra sumiso. El encarcelamiento, sin embargo, contradice las leyes nacionales.

La discusión sobre el pluralismo jurídico ha sido impulsada sobre todo por organizaciones indígenas que han emergido a partir de los años 70 del siglo pasado en los niveles local, nacional e internacional.⁴ Frecuentemente, estas organizaciones, además de reclamar mejoras económicas, sociales y culturales, exigen derechos políticos. Reclaman autonomía política y el estatus de “pueblos” para los grupos indígenas, lo que implica el reconocimiento del derecho indígena consuetudinario. El derecho tiene mucha importancia porque en la ONU se considera que la presencia de un sistema jurídico propio es un rasgo decisivo para el otorgamiento del estatus de “pueblo indígena”, lo que es una de las bases para la reivindicación de la autonomía.⁵

De esa manera, las organizaciones indígenas adoptan discursos difundidos por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial durante las últimas décadas y que son sostenidos, además, por numerosos juristas y científicos sociales.⁶

Pero la reclamación a favor del reconocimiento de las formas indígenas de control social y resolución de conflictos (el derecho consuetudinario) es también una respuesta a los graves defectos de los sistemas jurídicos nacionales. En muchos países latinoamericanos los sistemas jurídicos y policiales se caracterizan por la ineficiencia, la corrupción y la intromisión de intereses políticos. Los procesos y procedimientos son largos y costosos y los miembros de las capas sociales bajas, tanto indígenas como no indígenas, muchas veces sufren la discriminación de los funcionarios. Frecuentemente no hay traductores en los procesos, lo que da lugar a que muchos indígenas sean encarcelados sin saber por qué.

En términos políticos es perfectamente entendible que las organizaciones indígenas adopten el discurso del derecho internacional porque están buscando apoyo para llevar a cabo sus reclamaciones, muchas veces legítimas. Sin embargo, en la discusión sobre la relación entre el derecho consuetudinario y el dere-

³ No son la continuación de un sistema de gobierno precortesiano sino una estructura de autoridad informal que se ha desarrollado, sintetizando formas indígenas no indígenas, y que ha cambiado constantemente desde la época colonial.

⁴ Para una discusión de estos procesos de movilización véase por ejemplo Gabbert [1999a].

⁵ Cf. por ejemplo José Martínez Cobo, el relator especial de las Naciones Unidas, citado en Stavenhagen [1992: 87, nota 2] o Valdivia Dounce [1992: 120]. Los “pueblos indígenas” son definidos además como grupos no dominantes que tienen una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización, una identidad étnica, patrones culturales propios e instituciones sociales.

⁶ Véase, por ejemplo, Colombres 1982:234; Chase Sardi 1987; Gómez 1990:372.

cho nacional frecuentemente se dejan de lado aspectos de suma importancia tanto para el análisis científico como para la realización de reformas políticas.

Fragmentación política

Ya Max Weber [1921] y, más tarde, Frederic Barth [1969] señalaron que no hay una relación directa entre lengua, religión o costumbres compartidas (elementos relacionados con la comunidad cultural) y la cohesión social.

Por lo tanto, es generalmente incorrecto llamar “pueblos indígenas” a las colectividades delimitadas según criterios lingüísticos en América Latina. Tan sólo en México hay 56 de estos grupos lingüísticos, con tamaños muy distintos. Así, mientras hay más de 1,2 millones de hablantes del nahuatl, el censo de 1990 menciona solamente 149 hablantes del papago. Además, los grupos lingüísticos grandes abarcan varias lenguas que no son mutuamente entendibles. Muchos de estos grupos viven dispersos a lo largo de territorios inmensos en áreas frecuentemente no colindantes.

Es frecuente, sobre todo en los grupos lingüísticos grandes y medianos (con más de 10,000 hablantes), que no haya habido una cohesión social que integre al conjunto de los hablantes de la lengua. Esto es aplicable, por ejemplo, a los hablantes de nahuatl y zapoteco en México o de aymara y quechua en Bolivia y el Perú. La mayoría de los hablantes se ha definido fundamentalmente como miembro de una comunidad local. Entre comunidades colindantes no son raros los conflictos sobre tierras o derechos de agua que terminan en violencia.

De la situación de fragmentación esbozada resulta que las instituciones políticas que podrían figurar como sujetos de derechos de autonomía serían una creación nueva, cuya legitimidad no se derivaría de su tradicionalidad sino de su carácter representativo.

Heterogeneidad cultural

En la discusión sobre el derecho consuetudinario se supone generalmente que se está ante un corpus coherente de normas tradicionales, aceptadas por los miembros de los grupos indígenas, de manera que el estado no necesita más que reconocerlo. En realidad, con frecuencia hay diferencias culturales importantes en aspectos jurídicamente relevantes, como son la sucesión hereditaria o la división sexual de trabajo, incluso entre comunidades del mismo grupo lingüístico. En al-

gunas comunidades de los Altos de Chiapas (como Zinacantan, Oxchuc y Chenalhó), en México, solamente los hijos varones heredan tierra para el cultivo, mientras que en otras (como Chamula y Amatenango) las hijas pueden heredar también. Incluso las aldeas de una misma comunidad indígena no son culturalmente homogéneas. Pueden diferir, por ejemplo, en los sistemas de parentesco que juegan un rol central en la adscripción de derechos y deberes.

Por lo tanto, el reconocimiento del derecho consuetudinario no puede fundarse en un corpus de normas jurídicas compartidas ya existente, ni en el nivel de los grupos lingüísticos supralocales (los “pueblos” indígenas) ni en el nivel comunal. En ambos casos, un compromiso o consenso sobre las normas es concebible solamente como resultado de un proceso democrático.

Derecho y estructura social

Actualmente las costumbres o tradiciones indígenas son consideradas como la fuente principal de un sistema jurídico alternativo indígena. Se supone que el derecho consuetudinario tiene un carácter y una estructura parecida al nacional, lo que permitiría el reconocimiento del sistema jurídico indígena por el estado tan pronto que las condiciones políticas fuesen favorables.⁷ Sin embargo, tal opinión no tiene en cuenta que hay diferencias importantes entre el derecho existente en sociedades con estado y el de sociedades o grupos sin aparato estatal.

En sociedades complejas el derecho está controlado por el poder político central. Se trata de una esfera bien distinta y separada del resto de la sociedad. El derecho tiene sus normas propias, codificadas en leyes, estatutos y decisiones de tribunales, un lenguaje particular y especialistas profesionales. Las decisiones deben seguir las reglas escritas que se refieren a delitos definidos y no tienen en consideración la mayor parte de las relaciones entre los involucrados en una disputa ni su entorno social. Las decisiones del tribunal se imponen (mediante el uso de la fuerza, si es necesario) por instituciones especializadas del estado. Tal sistema jurídico responde a las necesidades de sociedades grandes y anónimas donde muchos conflictos se dan entre personas que no se conocen.

Las prácticas consuetudinarias de los grupos indígenas, por el contrario, no forman una esfera separada y autónoma de la sociedad, sino que están inmersas en la estructura social, “encajadas en la vida cotidiana”, como dice Simon Roberts [1979: 27]. Mientras el derecho nacional busca imputar culpa y sanción, el

⁷ Véase Carneiro da Cunha 1990: 300 y el artículo 9 de la convención 169 de la OIT (1989).

derecho consuetudinario de las comunidades indígenas generalmente busca lograr la reconciliación entre los litigantes e insiste en la reparación del daño. No se centra en un delito abstracto sino que considera la situación personal y las relaciones entre los que están directa o indirectamente involucrados en un pleito.

Sin embargo, en el debate sobre la autonomía indígena normalmente no se tiene en cuenta que esta orientación del derecho consuetudinario no se deriva de un carácter especial de las poblaciones indígenas, como sostienen muchas organizaciones indígenas, sino que es el resultado de decisiones de individuos que en las circunstancias dadas consideran ventajosas estas formas de resolución de conflictos.

Así como el derecho nacional necesita las instituciones estatales para imponer sus normas, el derecho consuetudinario depende de formas específicas de organización social. La reconciliación es posible solamente si los litigantes mismos tienen interés en restablecer las relaciones sociales entre ellos. Eso presupone, como ha señalado Max Gluckman, que haya relaciones duraderas y variadas entre los involucrados en el conflicto.⁸

En las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, por ejemplo, la capacidad de las autoridades "tradicionales" de arbitrar y mediar en conflictos internos se basaba, entre otros, en la dependencia mutua entre las generaciones. Para los hijos fue esencial cumplir por lo menos con algunos de sus obligaciones frente a sus padres porque en caso contrario estos tenían la posibilidad de privar un hijo rentiente y descuidado de su herencia en las tierras para la agricultura. La riqueza y el prestigio de los padres, por su parte, dependía de los jóvenes. En las relaciones de producción no monetarizadas ampliar su producción milpera fue solamente posible con la mano de obra de los jóvenes. Además los excedentes agrícolas permitían a un hombre adulto ganar prestigio por aceptar cargos en el sistema político-religioso "tradicional". Esta dependencia mutua entre los generaciones no resultaba siempre en soluciones de conflictos equilibradas pero generalmente ayudaba en encontrar acuerdos que tomaron en cuenta los intereses de todos los partes involucrados por lo menos parcialmente. Con la disminución de la importancia de la agricultura en la economía de los Altos, la aparición de nuevas fuentes de ingresos y la monetarización de las relaciones económicas y sociales en las comunidades en los últimos décadas las bases materiales del compromiso han sido enormemente debilitadas.

⁸ Véase Gluckman 1955, Felstiner 1974/75. La existencia de relaciones variadas entre los involucrados („multiplexas" en las palabras de Gluckman) es una condición necesaria pero de ninguna manera suficiente para el éxito de la mediación [Starr, Yngvesson 1975].

Debido a su estrecha relación con la estructura social, el derecho consuetudinario está cambiando continuamente de acuerdo con las variaciones en las condiciones económicas y sociales. Por lo tanto, su simple transmisión a entidades mayores, como una región o un grupo lingüístico, no parece factible. La mediación y el arbitraje, que funcionan en grupos pequeños cara a cara, no representan un modelo aplicable, sin mayores problemas, en colectividades más grandes.

La articulación de los derechos nacional y consuetudinario

La relación entre el derecho nacional y el derecho consuetudinario es parte de las relaciones de poder entre la sociedad dominante y la sociedad dominada. El derecho consuetudinario se puede entender como un intento de grupos subordinados de adaptar las normas nacionales a sus estructuras, valores e intereses propios. En consecuencia, el derecho consuetudinario generalmente no es un sistema de normas claramente separado del derecho oficial. La antropología jurídica reciente ha mostrado que el derecho nacional y el derecho consuetudinario más bien están articulados de una manera compleja. Los actores practican frecuentemente lo que Kebeet von Benda-Beckmann [1984] ha llamado “institution shopping”: Si un actor pretende preservar o restablecer las relaciones sociales con su adversario se dirige a las instituciones locales de mediación; si su objetivo es vengarse o conseguir ciertas ventajas frecuentemente recurre al derecho nacional.

Derecho consuetudinario y poder

En la discusión actual sobre la autonomía se supone generalmente que la aplicación del derecho consuetudinario en las comunidades indígenas permitiría la recuperación de la “armonía social” y que hay un consenso sobre sus normas y prácticas.

Sin embargo estos supuestos son problemáticos porque descuidan los conflictos internos existentes en las comunidades indígenas. Estos conflictos no se deben exclusivamente al debilitamiento de la cohesión social y del costumbre y de las normas tradicionales debido al avance del estado, como lo sugieren varios autores. Las relaciones de poder en las comunidades resultan también de la aplicación de las “costumbres”, porque no todos son iguales ante el derecho consuetudinario.

El resultado de una mediación o la sanción por la infracción de una norma dependen de las relaciones entre los litigantes y de su estatus social. Los cabildos

indígenas en México y Guatemala, por ejemplo, están dominados por hombres de edad avanzada. En los pleitos matrimoniales muchas veces favorecen a los maridos. Generalmente un reclamante joven tiene pocas posibilidades de conseguir sanciones formales en contra de un anciano. Si logra el pago de una indemnización por algún daño, la suma será menor que la que se podría obtener en disputas entre personas del mismo estatus social. En suma, la conciliación y el compromiso no significan necesariamente que la culpa y las cargas sean repartidas de manera igualitaria entre los litigantes.

Conclusión

- 1) Lo que está en juego en el debate acerca del reconocimiento de prácticas consuetudinarias no es la conservación de tradiciones indígenas prehispánicas. Lo que hoy se toma por tradición muchas veces no tiene más antigüedad que el derecho nacional.
- 2) Las normas jurídicas y las prácticas de resolución de conflictos de las sociedades no son de ninguna manera instancias neutrales. Tanto el derecho consuetudinario como el derecho nacional se ocupan del reparto de estatus, poder y recursos. Por ende el supuesto, presente en los discursos étnicos y nacionales, de que se basan en un consenso de los miembros de la sociedad no es muy realista. Más bien es de esperar que existan ideas diferentes y a veces contradictorias entre clases sociales, sexos y generaciones.

Por lo tanto el derecho consuetudinario no es un corpus coherente de normas compartidas en una sociedad sino una forma específica de organizar intereses contrarios y una arena en la que se despliegan diferentes estrategias, en un contexto de relaciones asimétricas de poder. Como lo han mostrado Comaroff y Roberts para los tswana en Africa del Sur, las reglas o normas no determinan directamente el resultado de los procesos de resolución de conflictos, sino que son más bien recursos manejados por los actores y por ende objeto de negociaciones [Comaroff, Roberts 1981].

Por lo tanto, las cuestiones centrales para el reconocimiento del derecho consuetudinario son: ¿Qué interpretación favorece más la democratización de las estructuras tanto locales como nacionales? ¿Cuánta representatividad y legitimidad tienen las autoridades y organizaciones indígenas?

- 3) La expansión del derecho nacional en regiones aisladas (por ejemplo, como resultado de la construcción de carreteras) no se debe interpretar simplemente como un acto del colonialismo interno frente a una sociedad local homogénea. Se trata más bien de un cambio en las relaciones internas de poder en

tanto que proporciona a ciertos individuos o grupos acceso a nuevos recursos y modifica así las condiciones de los procesos internos de negociación. Con respecto a esto, la actividad del estado tiene consecuencias no muy diferentes a las del trabajo de organizaciones no gubernamentales.

De vez en cuando las leyes nacionales favorecen que ciertos miembros de las comunidades indígenas puedan defenderse contra ciertas reglas existentes en su grupo que consideren injustas. En varias comunidades indígenas de México, por ejemplo, las mujeres se han apoyado en las leyes nacionales para realizar reclamaciones por una herencia a partes iguales en contra de sus hermanos y padres o para defenderse de un casamiento forzado.

- 4) El supuesto de que todas las sociedades tienen un corpus de reglas tradicionales que se podría transformar, sin mayores problemas, en derecho positivo parece altamente dudoso desde la perspectiva de la antropología jurídica. Las normas jurídicas, como todas las normas sociales, están continuamente renovándose. Por lo tanto, quien quiera respetar las formas consuetudinarias de resolución de conflictos existentes en grupos indígenas o minoritarios no debe reconocer reglas específicas sino la autoridad del grupo para desarrollar tales reglas. Pero se tiene que asegurar que estas decisiones puedan ser tomadas en un marco democrático.

Teniendo en cuenta las deficiencias masivas y la distancia tremenda que hay en América Latina entre las leyes escritas y la realidad jurídica, es urgente una reforma del derecho nacional y de las instituciones jurídicas estatales. Tal reforma tiene que garantizar que los sectores no privilegiados de la sociedad sean realmente capaces de salvaguardar sus derechos y contribuir así a la democratización profunda de las sociedades latinoamericanas.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALBÓ Javier, 1979, ¿Khitixptansa? ¿Quiénes somos? Identidad localista, étnica y clasista en los aymaras de hoy, en: *América Indígena* 39 (3): 477-528.
- ARDITO Wilfredo, 1997, The Right to Self-Regulation. Legal Pluralism and Human Rights in Peru, en: *Journal of Legal Pluralism* 39: 1-42.
- BARTH Frederik, ed., 1969, *Ethnic Groups and Boundaries*. Bergen: Universitetsforlaget.
- BENDA-BECKMANN Kebeet von, 1984, *The Broken Stairways to Consensus. Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications.
- BOHANNON Paul, 1967, The Differing Realms of Law, en: BOHANNON, Paul, ed., *Law and Warfare. Studies in the Anthropology of Conflict*. Garden City, NY, pp. 43-56.
- BRASS Paul R., 1991, *Ethnicity and Nationalism*. New Delhi, Newbury und London: Sage.
- CANCIAN Frank, 1976, *Economía y prestigio en una comunidad maya. El sistema religioso de cargos en Zinacantan*. México, D.F.: SEP/INI.

- CARNEIRO DA CUNHA Manuela, 1990, El concepto de derecho consuetudinario y los derechos indígenas en la nueva constitución de Brasil, en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 299-313.
- CASO Alfonso, ZAVALA Silvio, MIRANDA José, GONZÁLEZ NAVARRO Moisés, 1954, *La política indigenista en México. Métodos y Resultados*. Tomo I. México, D.F.: INI/SEP.
- CHASE-SARDI Miguel, 1987, *Derecho consuetudinario* Chamacoco. Asunción.
- CHENAUT Victoria, 1990, *Costumbre y resistencia étnica. Modalidades entre los Totonaca*, en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 155-189.
- CHENAUT Victoria, Sierra María Teresa, eds., *Pueblos indígenas ante el derecho*. México: CIESAS/CEMCA.
- CNI – Congreso Nacional Indígena, 2001, *Declaración por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos colectivos*, 3er Congreso Nacional Indígena, Nurió, Michoacán, 2-4 Marzo de 2001, www.laneta.apc.org/cni/3cni-dec.htm.
- COLLIER George, 1976, *Planos de interacción del mundo tzotzil. Bases ecológicas de la tradición en los Altos de Chiapas*, México. D.F.SEP/INI.
- 1989, Changing Inequality in Zinacantan: The Generations of 1918 and 1942, en: BRICKER Victoria, GARY Gossen, eds., *Ethnographic Encounters in Southern Mesoamerica: Essays in Honor of Evon Zartman Vogt Jr.* Albany: The University at Albany, pp. 111-124.
- 1994, Seeking Food and Seeking Money: Changing Relations of Production in Zinacantan, Chiapas, en: HEWITT DE ALCÁNTARA Cynthia, ed., *Economic Restructuring and Rural Subsistence in Mexico: Corn and the Crisis of the 1980's*. La Jolla, CA: Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, pp. 81-98.
- COLLIER George, LOWERY QUARATIELLO Elizabeth, 1994, *Basta! Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas*. Oakland, CA: Institute for Food and Development Policy.
- COLLIER Jane, 1976/77, Political Leadership and Legal Change in Zinacantan, en: *Law and Society Review* 11 (1): 131-163.
- 1979, Stratification and Dispute Handling in Two Highland Chiapas Communities, en: *American Ethnologist* 6 (2): 305-328.
- 1982, Justicia Popular en Zinacantan, en: *América Indígena* 42 (1): 99-115.
- 1995a, *El derecho zinacanteco. Procesos de disputar en un pueblo indígena de Chiapas*. México, D.F.: CIESAS/UNICACH [1a ed. en inglés 1973].
- 1995b, Problemas teórico-metodológicos en la antropología jurídica, en: CHENAUT, SIERRA 1995: 45-76.
- COLOMBRES Adolfo, 1982, Comentario crítico para la interpretación y reglamentación de la Ley 904/81, en: *Suplemento Antropológico* 17 (2): 235-240.
- COMAROFF John, ROBERTS Simon, 1981, *Rules and Processes: The Cultural Logic of Dispute in an African Context*. Chicago: University of Chicago Press.
- DENNIS Philip A., 1987, *Intervillage Conflict in Oaxaca*. New Brunswick/London: Rutgers University Press.
- DÍAZ-COUDER Ernesto, 1991, Lengua y sociedad en el medio indígena de México, en: ARGÜETA Arturo, WARMAN Arturo, eds., *Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indígenas en México*. México, D.F.: CIIH, UNAM, pp. 143-192.
- DÍAZ-POLANCO Héctor, 1997, *La rebelión zapatista y la autonomía*. México, D.F.: Siglo XXI.
- DIETZ Gunther, 1997, Die Purhépecha in Michoacán. Das Erwachen der Comunidades, en: SCHRIEK Ellen, SCHMUHL Hans-Walter, eds., *Das andere Mexiko. Indigene Völker von Chiapas bis Chihuahua*. Gießen: Focus, pp. 156-186.

- DOROTINSKY Deborah, 1990, Investigación sobre costumbre legal indígena en los Altos de Chiapas (1940-1970), en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 65-94.
- ENCUENTRO CONTINENTAL DE PUEBLOS INDIOS, 1990, Declaración de Quito, en: *Alai* 130: 1-8.
- FARRISS Nancy, 1984, *Maya Society under Colonial Rule. The Collective Enterprise of Survival*. Princeton: Princeton University Press.
- FAVRE Henri, 1984, *Cambio y continuidad entre los Mayas de México*. México, D.F.: INI.
- FELSTINER W.L.F., 1974/75, Influences of Social Organization on Dispute Processing, en: *Law and Society Review* 9 (1): 63-94.
- FREEMAN William S., 1979, *Conflict, Law, and Lawyers in Chiapas*, Mexico, en: Koch 1979:125-146.
- GABBERT Wolfgang, 1999a, Cultura, autonomía y estado: Movimientos sociales indígenas en América Latina, en: KOECHERT Andreas, PFEILER Barbara, eds., *Interculturalidad e identidad indígena. Preguntas abiertas a la globalización*. Verlag für Ethnologie: Hannover, pp. 13-25.
- 1999b, Violence and Social Change in Highland Maya Communities, Chiapas, Mexico, en: *Iberoamerikanisches Archiv* 25 (3/4): 351-374.
- GLUCKMAN Max, 1955, *The Judicial Process Among the Barotse of Northern Rhodesia*. Manchester: University of Manchester.
- GÓMEZ Magdalena, 1990, La defensoría jurídica de presos indígenas, en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 371-388.
- 1993, Hacia una definición del espacio de lo consuetudinario en el medio indígena y de sus posibilidades de ejercicio en el marco de la nueva legalidad, en: *Nueva Antropología* 13 (44): 9-15.
- 1995, Las cuentas pendientes de la diversidad jurídica. El caso de las expulsiones de indígenas por supuestos motivos religiosos en Chiapas, México, en: CHENAUT, SIERRA 1995: 193-218.
- GREENHOUSE Carol J., 1979, Avoidance as a Strategy for Resolving Conflict in Zinacantan, en: KOCH 1979: 105-123.
- GRIFFITHS John, 1986, What is Legal Pluralism?, en: *Journal of Legal Pluralism* 24: 1-50.
- GULLIVER Phillip H., 1969, *Dispute Settlement without Courts: The Ndendeuli of Southern Tanzania*, en: NADER, Laura, ed., *Law in Culture and Society*. Chicago: Aldine, pp. 24-68.
- HAMEL Rainer, 1990, *Lenguaje y conflicto interétnico en el derecho consuetudinario positivo*, en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 205-230.
- HOEBEL E. Adamson, 1954, *The Law of Primitive Man*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- ITURRALDE Diego, 1990, Movimiento indio, costumbre jurídica y usos de la ley, en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 47-63.
- KOCH Klaus-Friedrich, ed., 1979, *Access to Justice*. Vol. IV, The Ethnography of Law. Milano: Giuffrè.
- KÖHLER Ulrich, 1975, *Cambio cultural dirigido en los Altos de Chiapas*. México, D.F.: INI. [1a ed. en alemán 1969].
- KYMLICKA Will, 1995, *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press.
- LARTIGUE Francois, 1990, Los intermediarios culturales en la sierra tarahumara, en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 191-203.
- LAUGHLIN Robert M., 1969, The Tzotzil, en: VOGT Evon Z., ed., *Handbook of Middle American Indians*. Vol. 7 (Ethnology), Part 1. Austin: University of Texas Press, pp. 152-194.
- MERRY Sally, 1988, Legal Pluralism, en: *Law & Society Review* 22 (5): 869-896.
- 1991, Review Essay: Law and Colonialism, en: *Law & Society Review* 25.
- 1992, Anthropology, Law, and Transnational Processes, en: *Annual Review of Anthropology* 21: 357-379.

- MOORE Sally F., 1989, History and the Redefinition of Custom on Kilimanjaro, en: STARR, COLLIER 1989: 277-301.
- MÜNZEL Mark, 1977, *Schrumppkopfmacher? Jibaro-Indianer in Südamerika*. Frankfurt a. M.: Museum für Völkerkunde.
- 1985, Der vorläufige Sieg des indianischen Funktionärs über den indianischen Mediziner in Lateinamerika: Anmerkungen zum europäischen Diskurs über ethnische Minderheiten in der Dritten Welt, en: *Peripherie* 20, pp. 5-17.
- NADER Laura, 1989, The Crown, the Colonists, and the Course of Zapotec Village Law, en: STARR, COLLIER 1989: 320-344.
- NASH June, 1995, The Reassertion of Indigenous Identity: Mayan Responses to State Intervention in Chiapas, en: *Latin American Research Review* 30 (3): 7-41.
- OIT, 1989, C 169, *Convenio sobre pueblos indígenas y tribales*, www.oit.cr/mdtsanjo/indig/.
- PRIETO Esther, 1990, Derecho consuetudinario indígena en la legislación paraguaya (siglo XX), en: STAVENHAGEN, ITURRALDE 1990: 315-331.
- REGINO Adolfo, 2001, Argumentos de un dirigente indio, en: *Masiosare* [Suplemento La Jornada, México], 18/3/2001.
- ROBERTS Simon, 1979, *Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology*. Harmondsworth: Penguin.
- ROSENBAUM Brenda, 1993, *With Our Heads Bowed. The Dynamics of Gender in a Maya Community*. Institute for Mesoamerican Studies: Albany.
- ROTHSCHILD Joseph, 1981, *Ethnopolitics: A Conceptual Framework*. New York: Columbia University Press.
- ROVIRA Guiomar, 1997, *Mujeres de maíz*. México, D.F.: Era.
- SIERRA Maria Teresa, 1995a, Articulaciones entre ley y costumbre: Estrategias jurídicas de los nahuas, en: CHENAUT, SIERRA 1995: 101-123.
- 1995b, Indian Rights and Customary Law in Mexico: A study of the Nahuas in the Sierra de Puebla, en: *Law & Society Review* 29 (2): 227-254.
- SMAILUS Ortwin, 1990, Sprachen, en: KÖHLER, Ulrich, ed., *Altamerikanistik. Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und Südamerikas*. Berlin: Reimer, pp. 255-273.
- SOSA SANTOS Boaventura de, 1987, Law: A Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law, en: *Journal of Law and Society* 14: 279-302.
- 1998, *La globalización del derecho*. Bogotá.
- SPORES Ronald, 1984, *The Mixtecs in Ancient and Colonial Times*. Norman: University of Oklahoma Press.
- STARR June, Collier Jane F., eds., *History and Power in the Study of Law*. Ithaca und London: Cornell University Press.
- STARR June, Yngvesson B., 1975, Scarcity and Disputing: Zeroing-in on Compromise Decisions, en: *American Ethnologist* 2: 553-566.
- STAVENHAGEN Rodolfo, 1992, Los derechos de los indígenas: algunos problemas conceptuales, en: *Nueva Antropología* 8 (43): 83-99.
- STAVENHAGEN Rodolfo, ITURRALDE Diego, eds., 1990, *Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina*. México, D.F.: Instituto Indigenista Interamericano, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- STRÖBELE-GREGOR Juliana, 2001, *Indigene Frauen und Gewalterfahrungen – Wandlungen im Rechtsbewußtsein innerhalb indigener Gemeinschaften in Peru*, Sektion Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Bonn, 10-12 de mayo.

- TAYLOR Charles, 1993, Die Politik der Anerkennung, en: TAYLOR, Charles, ed., *Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung*. Frankfurt a. M.: Fischer, pp. 13-78.
- VALDIVIA DOUNCE Teresa, 1992, Por qué hoy una antropología jurídica en México?, en: *Nueva Antropología* 8 (43): 111-122.
- WEBER Max, 1980, *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: T.C.B. Mohr [1a ed. 1921].
- WESEL Uwe, 2001, *Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart*. München: Beck.
- WHITECOTTON Joseph W., 1977, *The Zapotecs. Princes, Priests, and Peasants*. Norman: University of Oklahoma Press.
- ZÁRATE HERNÁNDEZ José Eduardo, 1991, Notas para la interpretación del movimiento étnico en Michoacán, en: MURO Victor Gabriel, CANTO CHAC Manuel, eds., *El estudio de los movimientos sociales: teoría y método*. El Colegio de Michoacán. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, pp. 111-129.
- YRIGOYEN FAJARDO Raquel, 1999, El reconocimiento constitucional del derecho indígena en los países andinos, en: ASSIES Willem, VAN DER HAAR Gemma, HOEKEMA André J., eds., *El reto de la diversidad*. Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán, pp. 343-380.

Polonia

Estudios
Latinoamericanos

Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos

ISSN 0137-3080

Original title / título original: *Problemas para el Reconocimiento del Pluralismo Legal en America Latina*

Author(s)/ autor(es):

Wolfgang Gabbert

Published originally as/ Publicado originalmente en:
Estudios Latinoamericanos, 24 (2004), pp. 55-66.

DOI: <https://doi.org/10.36447/Estudios2004.v24.art3>

Estudios Latinoamericanos is a journal published by the Polish Society for Latin American Studies (Polskie Towarzystwo Studiów Latinoamerykanistycznych).

The Polish Society for Latin American Studies is scholarly organization established to facilitate research on Latin America and to encourage and promote scientific and cultural cooperation between Poland and Latin America.

Estudios Latinoamericanos, revista publicada por la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos (Polskie Towarzystwo Studiów Latinoamerykanistycznych).

Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos es una asociación científica fundada con el fin de desarrollar investigaciones científicas sobre América Latina y participar en la cooperación científica y cultural entre las sociedades de Polonia y América Latina.